



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es

ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL

S.J.: 15/2024

Se ha recibido en este Servicio Jurídico, para su preceptivo informe, el expediente de modificación nº1 del contrato de servicios denominado **“SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL. LOTE 2”**. Expte: A/SER-001735/2022.

A la vista de los antecedentes remitidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tenemos el honor de emitir el siguiente

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Ha tenido entrada en este Servicio Jurídico la petición de Informe del presente modificado junto con la documentación y los antecedentes que conforman el expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. - Procede, en primer lugar, determinar el régimen jurídico aplicable al expediente de modificación propuesto.

Tal y como se infiere del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: *“Los contratos administrativos*

adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se registrarán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”

A la vista de este precepto, así como de la disposición final decimosexta de la propia Ley 9/2017, que remite su entrada en vigor al día 9 de marzo de 2018, y dado que el presente contrato fue adjudicado el día 28 de diciembre de 2022 a la UTE PROINTEC, S.A.U. - INTECSA-INARSA, S.A.U. (UTE L11 PLAZA ELÍPTICA LOTE 2), la normativa aplicable al modificado del contrato que nos ocupa viene constituida por la ley vigente al tiempo de su adjudicación; esto es, la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

Segunda.- Conforme al artículo 190 de la LCSP, la facultad de modificar el contrato por razones de interés público es una de las prerrogativas de que dispone la Administración en materia de contratación, ajustándose a los requisitos establecidos en dicho precepto y en los artículos 202 y siguientes de la misma.

En efecto, la legislación aplicable de contratos de las Administraciones Públicas tradicionalmente consagra, entre las prerrogativas de la Administración en la contratación pública, la llamada *potestas variandi* o potestad de modificación del contrato; así se recoge en el artículo 190 LCSP: *"Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta”*.

La jurisprudencia ha señalado que el llamado *ius variandi*, esto es, el poder de la Administración de modificación unilateral del contrato, es una de las más trascendentales características del contrato administrativo, en cuanto que implica una separación del principio básico en materia contractual de *pacta sunt servanda* (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1987). Constituye un poder para adaptar los contratos a las



necesidades públicas, de manera que es el interés general el que debe prevalecer en todo caso (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1978).

El necesario equilibrio entre el cumplimiento del contrato administrativo en sus términos y la admisibilidad de que la Administración pueda variar tales condiciones en determinadas circunstancias y por razones de interés público, llevan a admitir el citado *ius variandi* de la Administración, pero con sometimiento a determinados requisitos, para evitar la indebida alteración de los principios que rigen la licitación pública.

Así, y como ha recordado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes, el sometimiento a cauces estrictos del *ius variandi* de la Administración tiene su razón de ser precisamente en la salvaguarda del principio de concurrencia y licitación pública que preside la contratación administrativa. Se advierte igualmente que tal facultad debe ser entendida de modo restrictivo, interpretándose la Ley en la forma y sentido más rigurosos (Dictámenes de 10 de septiembre de 1998, 5 de diciembre de 1984 y 24 de julio de 2003), todo ello, por cuanto un uso indiscriminado de dicha potestad de modificación de los contratos, podría entrañar un claro fraude de ley, en cuanto cerraría el acceso de otros posibles contratistas.

Tercera. - La denominada potestad de modificación del contrato, por tanto, se constriñe a lo dispuesto en los artículos 203 y siguientes y solo concurre *por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección (4ª), y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207*. Además, estas modificaciones deben formalizarse conforme al artículo 153 y publicarse de acuerdo con los artículos 207 y 63. El artículo 203.2 aclara también que se refiere a contratos administrativos (artículo 25) celebrados por los órganos de contratación.

Pues bien, los contratos administrativos solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se cumplan los requisitos del art. 203 LCSP, que señala:

“1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en

los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.”.

En consecuencia, en sede de modificación contractual, la LCSP distingue en función de que dicha modificación esté prevista o no en el pliego; en el primer caso, se regirá por el artículo 204, mientras que en caso de que no esté prevista o que, habiendo sido prevista, no se ajuste a lo establecido en el citado precepto, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 205.

Hay que recordar, no obstante, que la posibilidad de modificar el contrato por una causa no prevista en el pliego, tiene los límites que dispone el apartado 2 del mismo artículo 205.

Cuarta.- En el caso que nos ocupa, nos encontramos con una serie de modificaciones cuya posibilidad se encuadra en alguna de las condiciones previstas en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), y de otras modificaciones que no encajan en ninguna de las condiciones previstas en el Pliego.

En efecto, el apartado 22 de la cláusula 1 del Pliego señala:

“Modificaciones previstas del contrato: Sí.

Se prevé la modificación del lote 2 del contrato en el siguiente supuesto:

Condiciones en que podrán efectuarse: Necesidad de modificar el proyecto de obras constatada por el responsable del contrato.

Naturaleza: Inclusión en el contrato de la prestación consistente en redactar el proyecto modificado del contrato principal de las obras, que supondrá la necesidad de modificar el PPT para incluir y definir el alcance de esta obligación.

Alcance y límites: La redacción del proyecto modificado tendrá un alcance acorde con la necesidad detectada por el responsable del contrato de obras y supondrá un incremento del precio del contrato adecuado a dicho alcance, mediante la introducción de nuevos precios unitarios. Podrá suponer un incremento máximo de 6 (SEIS) meses del plazo de ejecución del contrato.

Procedimiento: Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las modificaciones del contrato que se produzcan, se estará a lo dispuesto en el artículo 207 de la LCSP.

Cuantía máxima. Se podrán evaluar y aprobar modificaciones del contrato debidas a esta causa siempre que la cuantía de tales modificaciones no sea superior de forma individual o acumulada al 20% del precio inicial del lote del contrato”.

Como puede observarse, el Pliego prevé la posibilidad de modificar el contrato en el supuesto expresamente recogido en el apartado transcrito; y así, de acuerdo con la propuesta de la Subdirección General de Proyectos y Construcción de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, de fecha 7 de febrero de 2024, nos encontramos con una modificación propuesta que encajaría en la condición prevista en el Pliego, y con otras dos modificaciones que no se ajustan a las causas previstas en el Pliego, y que tienen su encaje en los supuestos b) y c) del apartado nº 2 del artículo 205 de la LCSP, concretándose el objeto del modificado en las tres actuaciones que se describen en dicha propuesta, y que pasaremos a examinar en la consideración jurídica siguiente.

Con carácter previo, y como ya hemos señalado, debe existir en todo caso un interés público que aconseje y justifique la modificación, que no afecte al contenido esencial y que se motive la causa. Como señala el TJUE, solo así se garantiza la igualdad de trato (Sentencia “Socchi di Frutta”, de 29 de abril de 2004).

En este sentido, la citada propuesta de modificación justifica la concurrencia de un interés público señalando que *“Dicha modificación obedece, conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a razones de interés público, que consisten en la conveniencia de dar continuidad al contrato y entregar al uso público la obra de AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL, considerada una infraestructura de interés público, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 bis de la Ley 5/85 de 16 de mayo de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos regulares de Madrid, y concretamente en su Disposición Adicional Segunda. La futura ampliación de la Línea 11, conformará una línea transversal que descongestionará la Línea 6 en su tramo sur, conectará con la Estación de Atocha y será intercambio con otras tres líneas de Metro, generando rutas alternativas a la línea 6 para la comunicación de las líneas radiales. La misma razón de interés público es asimismo aplicable al presente contrato de servicios, vinculado al contrato principal”*.

Quinta.- Una vez analizada la necesidad de concurrencia del interés público en el presente borrador de Orden de modificado, pasaremos a examinar si se cumplen, en primer lugar, los requisitos previstos en el Pliego para que tenga lugar la primera modificación propuesta.

A tal efecto, el art.204.1 LCSP señala:

“1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad...”

2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera este si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual”.

En la citada propuesta de modificación se recogen las razones por las que la Subdirección General de Proyectos y Construcción de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo entiende que la modificación propuesta encaja en la transcrita condición del apartado 22 de la cláusula 1 del PCAP, exponiendo la justificación y el objeto de la misma en los siguientes términos:

“2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN

“...Se trata de una causa prevista en el Pliego de Cláusulas para la modificación del contrato dado que existe la necesidad de redacción de un proyecto modificado del proyecto de obras constatada por el responsable del contrato en la propuesta técnica de solicitud de autorización para inicio de redacción del proyecto modificado (Anejo 3 del presente documento), de fecha 17 de agosto de 2023, y ratificada por la Orden de fecha 17 de agosto de 2023, firmada por el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, en que se Autoriza la redacción de la modificación del proyecto del contrato de obras: “CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL” (Anejo 2 del presente documento) por lo que se requiere incluir en el contrato la prestación consistente en redactar el proyecto modificado del contrato principal de las obras, no superando la cuantía de esta modificación el 20% del precio inicial del contrato...

2.2 OBJETO DE MODIFICACIÓN

La modificación es la inclusión en el contrato de la prestación consistente en redactar el proyecto modificado nº1 del contrato principal de las obras “AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL...”

Añade el borrador de Orden sujeto a informe que *“Dicha modificación supone modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares”* y que *“La modificación implica un aumento del precio del contrato de 592.925,62 euros (IVA incluido), lo que supone un incremento del 6,78% del presupuesto inicial”*

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Jurídico entiende que la modificación propuesta tiene su encaje en la condición del apartado 22 de la cláusula 1 del PCAP, si bien

podría recogerse en el borrador de Orden que esta modificación no alteran la naturaleza global del contrato inicial, tal y como dispone el art. 204.2 LCSP citado.

Por lo demás, simplemente sugerir que sería más conforme con la terminología empleada por la LCSP que en lugar de decir "*Modificaciones que responden a circunstancias previstas en el contrato*" se dijera "*Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares*" (ex art. 204 LCSP). Lo que es predicable respecto de las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (ex art. 205 LCSP).

Sexta.- A continuación, pasaremos a analizar las otras dos modificaciones no previstas en el PCAP.

A tal efecto, el art. 205.1 LCSP dispone que:

"1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

- a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo.
- b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria".

Con relación al primero de los requisitos tanto la propuesta de modificado, como el borrador de resolución sujeto a este informe, encuadran la justificación de las otras dos actuaciones objeto de modificación en los supuestos b) y c) del art. 205.2 LCSP:

"b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

- 1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.
- 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido...

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando

se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación”.

Habría que analizar, por tanto, si las presentes modificaciones cumplen los requisitos previstos en los apartados del citado precepto.

Para ello en la citada propuesta de modificación se exponen las razones por las que la Subdirección General de Proyectos y Construcción de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo entiende que la modificación propuesta cumple con los requisitos previstos en el art. 205.1 y 2 b y c) LCSP, exponiendo la justificación y el objeto de cada una de las dos modificaciones propuestas.

Así, con relación a la primera consta en el expediente que:

“Esta modificación está justificada en el supuesto b) del artículo 205.2 de la LCSP, dado que se trata de modificaciones no previstas que derivan de circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento en el que tuvo lugar la licitación del contrato.

Esta circunstancia es sobrevenida ya que Metro de Madrid, con posterioridad al inicio del contrato principal de las obras “Ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid. Tramo Plaza Elíptica - Conde de Casal” (7 de noviembre de 2022), así como al inicio del contrato complementario Lote 2 del contrato de servicios de dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica de las obras que comenzó el día 8 de febrero de 2023; solicitó mediante carta con fecha 22 de enero de 2024, la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo.

Se trata de una circunstancia imprevisible puesto que el Reglamento de Ejecución (UE) nº402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo no es de aplicación para los metros, tranvías y otros sistemas de ferrocarril ligero y, por tanto, no se incluyó su aplicación y supervisión en el presente contrato de servicios de la Asistencia Técnica.

A pesar de que no es una normativa de aplicación para los metros, Metro de Madrid ha apostado por construir un sólido sistema de gestión de la Seguridad Ferroviaria Operacional (SFO), basándose en las mejores prácticas conocidas. Por ello, se ha certificado bajo el referencial del Modelo AENOR de Sistema de Gestión de la Seguridad Ferroviaria Operacional, que introduce una metodología para la gestión y control de riesgos basada en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, citado. En este contexto, Metro de Madrid solicita la aplicación del citado Reglamento 402, en todas las obras de ampliación de la red de Metro que actualmente se están llevando a cabo”.

Y añade que:

“Se cumplen además los tres requisitos recogidos en el supuesto, que son:

- 1º. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.
- 2º. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
- 3º. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

Esta modificación se deriva de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever ya que, durante el pertinente periodo de información pública, entre el 3 de junio y el 12 de julio de 2019, y recibo de alegaciones del contrato de obras “Proyecto Constructivo de Ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid. Tramo Plaza Elíptica – Conde de Casal” A/OBR-036452/2021”, Metro de Madrid no realizó alegación ni indicación alguna respecto a la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013. Además, como se ha explicado, los metros están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento R402/2013, por tanto, no se incluyó su aplicación y supervisión en el presente contrato de servicios de la Asistencia Técnica.

Se cumple la condición 205.2 b) 2ª, de que la modificación no altera la naturaleza global del contrato, puesto que no se modifica el tipo de contrato, conforme indica el artículo 204.2 de la LCSP.

La cuantía del modificado asciende a 290.569,13 € (IVA incluido), lo que representa un 3,32% respecto al precio inicial del contrato, por lo que la cuantía de la modificación aislada o conjuntamente no supera el 50% del precio inicial”.

En cuanto a la segunda modificación no prevista y amparada en el art. 205.2 c) LCSP se señala en la propuesta de modificación que *“Esta modificación está justificada en el supuesto c) del artículo 205.2 de la LCSP ya que se trata de una modificación no sustancial puesto que no tiene como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. La continuidad provisional de las obras del contrato de “CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL autorizada con fecha 16 de noviembre de 2023, implica un incremento de los trabajos de apoyo técnico previstos en el PPT en su apartado 3.1.2.1 Trabajos de Asistencia Técnica, este incremento de las prestaciones no se incluyó en el contrato inicial porque son propias de la continuación provisional y empiezan a desarrollarse a partir de su aprobación, no estando contempladas en el proyecto original por venir exigidas por la continuación provisional”*.

Continúa indicando que:

“No son modificaciones sustanciales al cumplirse los requisitos recogidos en el artículo 205.2 supuesto c,) ya que, además de no tratarse de un contrato de naturaleza diferente, se cumple que:

1. No introduce condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos ya que no se requiere una clasificación diferente a la exigida en el procedimiento de licitación inicial ni esta modificación habría atraído a más participantes en el procedimiento de contratación puesto que las prestaciones se incrementan, pero no varía el contenido (o la naturaleza) de las mismas

2. La modificación no altera el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial, ya que no se incrementan las prestaciones del contrato original en un importe que representen un incremento sustancial

3. El ámbito del contrato no se amplía de forma importante, ya que:

- a) El valor de la modificación no excede ni aislada ni conjuntamente del 15% del precio inicial del mismo (IVA excluido) (es de un – 14,64%)



b) Las prestaciones objeto de la modificación no están dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro.

Esta modificación se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hace necesaria”.

De las razones expuestas parece desprenderse que estas dos modificaciones no previstas en pliegos cumplen con todos los requisitos exigidos por el art. 205.2 B) y c) LCSP.

Además, se indica en el borrador de Orden que las modificaciones del contrato suponen un incremento de un 24,74% con respecto el precio original del contrato sin ampliación del plazo.

En efecto, la modificación propuesta implica un incremento del precio del contrato que asciende a 2.163.468,92 euros, lo que supone un incremento de un 24,74% sobre el precio de adjudicación del contrato, no superando el límite recogido ni en el apartado 22 del pliego, ni en el art. 205.2 b) LCSP, ya que la modificación prevista según el Pliego equivale a un porcentaje del 6,78 % del precio del contrato original y las modificaciones no previstas en el Pliego equivalen a un porcentaje del 17,96 % del precio del contrato original.

En definitiva, y del examen de las razones aducidas para justificar el presente modificado, este Servicio Jurídico puede concluir que las modificaciones propuestas cumplen los requisitos exigidos en los artículos 204 y 205. 1 y 2 de la LCSP.

Séptima. - En relación con el procedimiento a seguir, como indica la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid (por todos, sus Dictámenes de 29 de octubre de 2015 y de 25 de septiembre de 2013), la normativa procedimental a aplicar debe ser la vigente al momento de iniciarse el procedimiento de interpretación, modificación y resolución, por aplicación de las disposiciones transitorias del Código Civil, erigidas en derecho intertemporal común. En idéntico sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado en sus Dictámenes 3062/1998 y 975/2002, así como el Dictamen 328/2012, de 27 de diciembre, del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.

El artículo 203 de la LCSP dispone que los contratos administrativos solo podrán modificarse de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 y con las particularidades previstas en el artículo 207.

Así, el artículo 191 LCSP, dentro del capítulo relativo a las prerrogativas de la Administración Pública, regula el procedimiento de ejercicio de estas prerrogativas, señalando:

- “1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.
2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195.
3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación:
 - a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista.
 - b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.
 - c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.
4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos”.

Por su parte, el apartado 3 del citado artículo 203 LCSP indica que las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 y deberán publicarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 207 y 63.



Con relación al trámite de audiencia, se cumple con el trámite exigido por el art.191 de la LCSP. Así consta en el expediente que con fecha 8 de febrero de 2024 se dio audiencia al contratista, el cual dio su conformidad el 9 de febrero del año en curso.

Finalmente, y dado que el importe de las modificaciones del contrato no previstas en Pliegos no superan el 20 por ciento del precio inicial del contrato, no es preceptivo el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, de acuerdo con el art. 191.3 b) LCSP.

En virtud de lo expuesto, procede emitir la siguiente

CONCLUSIÓN

El expediente de modificación sometido a Informe **merece el parecer favorable** de este Servicio Jurídico.

Es cuanto se tiene el honor de informar, no obstante V.I. resolverá.

Madrid, a fecha de firma

LA LETRADA DE LA COMUNIDAD D MADRID

Firmado digitalmente por: ALMAGRO MORCILLO CAROLINA
Fecha: 2024 02 16 12:14

Fdo: Carolina Almagro Morcillo

**SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS.**